

Política exterior colombiana: Historia, agenda y perspectivas

Editores

Paula Ruiz-Camacho
Luis Fernando Vargas-Alzate



Política exterior colombiana : historia, agenda y perspectivas / Alejandro Morales Henao...

[et al.] ; editores Paula Ruiz-Camacho, Luis Fernando Vargas-Alzate. – Medellín : Universidad Externado de Colombia, RedIntercol, Editorial EAFIT, 2025.

349 p. ; il. ; 24 cm. -- (Académica).

ISBN: 978-958-720-983-9

ISBN: 978-958-720-984-6 (versión EPUB)

ISBN: 978-958-720-985-3 (versión PDF)

1. Política Exterior – Colombia. 2. Colombia – Relaciones exteriores. 3. Política Exterior – Colombia – Historia. 4. Colombia – Relaciones exteriores – Historia. 5. Colombia – Historia diplomática. 6. Conflicto armado – Colombia - Aspectos internacionales. I. Morales Henao, Alejandro. II. Ruiz Camacho, Paula, edit. III. Vargas Alzate, Luis Fernando, edit. IV. Tít. V. Serie

327.861 cd 23 ed.

P769

Universidad EAFIT - Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Política exterior colombiana: Historia, agenda y perspectivas

Primera edición: julio de 2025

© Universidad Externado de Colombia

Calle 12 No. 1-17 Este, Bogotá, DC, Colombia

<http://publicaciones.uexternado.edu.co/>

Correo electrónico: publicaciones@uexternado.edu.co

© RedIntercol

Carrera 17, número 109 A - 08, Bogotá, Colombia.

Teléfono: 3213071661

E-mail: presidencia@redintercol.net

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur – 50. Medellín, Antioquia

<http://www.eafit.edu.co/editorial>

Correo electrónico: obraseditorial@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-983-9

ISBN: 978-958-720-984-6 (versión EPUB)

ISBN: 978-958-720-985-3 (versión PDF)

DOI: <https://doi.org/10.17230/9789587209839lr0>

Edición y corrección de textos: Mónica Palacios

Diseño y diagramación: Margarita Rosa Ochoa Gaviria

Imagen de carátula: www.freepik.es

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial

Editado en Medellín, Colombia

Tabla de contenido

Agradecimientos	7
Prólogo	9
Introducción	13
Capítulo 1. Aproximación a los conceptos de relaciones internacionales, política internacional y política exterior. <i>Luis Fernando Vargas-Alzate</i>	23
Capítulo 2. De los altibajos iniciales al enfoque de intereses: doscientos años de política exterior colombiana (1821-2021). <i>Diego Jaramillo Mutis y Manuel Alejandro Pantoja Rodríguez</i>	47
Capítulo 3. Inserción internacional de Colombia en el siglo xxi. <i>Francisco J. Coy Granados y Alejandro Morales Henao</i>	65
Capítulo 4. El conflicto armado y la construcción de la paz en la política exterior colombiana. <i>Diana Marcela Rojas</i>	83
Capítulo 5. Una paz esquiva: retos de la paz y la seguridad en las zonas fronterizas de Colombia después de la firma del Acuerdo de paz en 2016. <i>Rafael Enrique Piñeros Ayala y Valentina Mosquera Roa</i>	105
Capítulo 6. Colombia y la ONU en el posconflicto. <i>Fabio Sánchez</i>	127
Capítulo 7. Cooperación internacional para el desarrollo y política exterior en Colombia. <i>Paula Ruiz Camacho y María Fernanda Sanzón</i>	147

Capítulo 8. Multilateralismo latinoamericano y su significado para Colombia. <i>Martha Ardila</i>	169
Capítulo 9. Colombia y Venezuela: una aproximación a la relación bilateral. <i>Ana María Amaya Alviar</i>	187
Capítulo 10. Colombia y los países “semejantes”: un socio (des)alineado en Suramérica. <i>María Catalina Monroy y Caren Cubides</i>	211
Capítulo 11. Las relaciones de Colombia con China: historia, agenda bilateral y asociación estratégica. <i>Julio-César Cepeda-Ladino</i>	237
Capítulo 12. Colombia en Asia: narrativas estratégicas y evolución de la liberalización en el siglo XXI. <i>Irma Liliana Vásquez Merchán y Ángela Cristina Pinto Quijano</i>	253
Capítulo 13. Colombia y Rusia: relaciones al margen de la rivalidad entre grandes potencias. <i>Vladimir Rouvinski</i>	275
Capítulo 14. Relaciones internacionales en Colombia: una disciplina menos joven. <i>Carolina Cepeda Masmela</i>	293
Capítulo 15. La política exterior en prospectiva: consideraciones finales. <i>Paula Ruiz-Camacho y Luis Fernando Vargas-Alzate</i>	311
Resúmenes	335
Sobre los autores	345

Capítulo 4

El conflicto armado y la construcción de la paz en la política exterior colombiana

<https://doi.org/10.172309789587209839ch4>

Diana Marcela Rojas

Introducción

Si bien la guerra en el país se ha caracterizado como un conflicto armado interno, dado que los actores y los escenarios han sido fundamentalmente nacionales, esta no se ha desarrollado abstraída de lo que sucede en el contexto internacional. Son múltiples los factores externos que han marcado y transformado la confrontación bélica: los debates en torno a la soberanía y sus alcances y límites, la disputa geopolítica por las zonas de influencia de las grandes potencias, el auge de las economías ilegales transnacionales, los desafíos a la seguridad regional, así como los cambios en la valoración del uso de la violencia entre y dentro de los Estados.

En el caso colombiano, la incidencia de las variables internacionales se ha ido intensificando en las décadas más recientes, debido principalmente a dos procesos entrecruzados: de un lado, las mutaciones en la dinámica en el interior del conflicto armado, y del otro, las transformaciones del entorno mundial, especialmente a partir del fin de la Guerra Fría. Se ha establecido así una creciente conexión, variable y compleja, entre los factores internos y los externos que han afectado tanto la guerra como las opciones para solucionarla.

Para caracterizar este fenómeno se ha utilizado el concepto de “internacionalización” que generalmente se refiere al proceso de creciente interconexión e interdependencia entre los Estados-nación y otros actores en el escenario global. Este concepto enfatiza la participación de actores externos en los conflictos internos, como Estados, organizaciones internacionales y actores no estatales. El estudio del fenómeno través de la lente de la internacionalización permite un examen detallado de los actores, motivaciones y mecanismos específicos a través de los

cuales se produce la participación externa; ayuda además a comprender cómo y por qué los conflictos se interconectan con dinámicas regionales y globales, incluidas rivalidades geopolíticas, competencia por recursos e influencias ideológicas. La internacionalización también resalta las consecuencias de la intervención externa para la dinámica del conflicto, los esfuerzos de consolidación de la paz y la estabilidad regional.

Para el análisis del caso colombiano se utilizará aquí una acepción más acotada del concepto; lo que se ha dado en llamar “internacionalización de la guerra y la paz” se refiere a la manera en que los sucesivos Gobiernos nacionales han afrontado los desafíos planteados por interconexión entre los componentes internos y externos del conflicto armado. Al convertirse en un asunto central, ingentes esfuerzos y recursos se han invertido para gestionar el involucramiento de actores e instancias internacionales en las tentativas gubernamentales de resolver la larga y compleja guerra que hemos vivido.

Desde la Diplomacia por la paz y el Plan Colombia en la administración Pastrana (1998-2002), la Seguridad Democrática bajo el Gobierno Uribe (2002-2010), hasta las negociaciones en La Habana y el Acuerdo de paz de la presidencia Santos (2010-2018), la Paz con legalidad de la administración Duque (2018-2022), y la Paz Total del Gobierno Petro (2022-2026), la política exterior ha sido puesta al servicio de la visión y las decisiones de los mandatarios para pacificar la nación. ¿Cuál ha sido la dinámica de esta internacionalización? ¿Qué estrategias se implementaron? ¿Qué problemas enfrentaron? ¿Cuáles han sido sus resultados?

El objetivo del capítulo es brindar una comprensión de conjunto del papel que ha tenido la política exterior colombiana en la búsqueda de soluciones a la guerra interna y presentar las estrategias desarrolladas por los Gobiernos para responder a este desafío durante las dos primeras décadas del presente siglo.

El hilo conductor del análisis lo constituye la contraposición entre dos visiones antitéticas del conflicto armado interno y de las subsecuentes opciones para solucionarlo. La preferencia por una de estas dos perspectivas ha determinado la agenda de cada administración y, por ende, la estrategia de política exterior para respaldarla en el ejercicio de la política internacional. Las dos perspectivas señaladas se configuran en torno a la concepción de la naturaleza del conflicto, sus causas

y manifestaciones, así como respecto al modo más adecuado y legítimo de resolverlo.

De un lado, en una visión más política, se considera que la lucha armada de las guerrillas surge como reacción al carácter restringido de la democracia colombiana durante el Frente Nacional (1958-1974);²⁰ en su propósito de alcanzar un orden social más justo y democrático, la insurgencia definió un proyecto revolucionario, basado en la ideología comunista, en el que se planteaba la transformación del régimen a través de las armas. Desde esta concepción, el conflicto tenía, pues, un origen y un significado fundamentalmente político que reconocía a las guerrillas como actores con un proyecto y unas reivindicaciones válidas. En consecuencia, la manera más adecuada para terminar con la guerra era propiciar un proceso de paz, en el que se discutieran las demandas y se negociaran las aspiraciones de los rebeldes.

Del otro lado, en la visión antagónica, con el fin de la Guerra Fría, las guerrillas habían perdido no solo su fundamento ideológico sino también su carácter político; el creciente involucramiento con el narcotráfico, el aumento de los secuestros y las extorsiones, y los ataques a la población civil le restaron apoyo social y legitimidad a su causa. La insurgencia había derivado en un fenómeno de criminalidad, por ende, y sobre todo, en un problema de seguridad. Frente a ello, la respuesta no podía ser otra que la militar; el Estado debía ejercer su capacidad represiva para contrarrestar la amenaza de los grupos armados ilegales.

Las fluctuaciones entre estas dos visiones permiten caracterizar la internacionalización de la guerra y la paz en Colombia en tres momentos distintivos: el primero corresponde a una etapa de ambigüedad en la que la estrategia de política exterior combina ambas perspectivas. El segundo momento se decanta por la concepción de seguridad que prioriza la solución militar. El tercero se inclina por la visión más política, dando lugar a un proceso de negociación que culminará con un acuerdo de paz.

²⁰ El Frente Nacional fue un acuerdo político bipartidista en Colombia entre los partidos Liberal y Conservador que estableció la alternancia en el poder. Este acuerdo surgió como una solución a la violencia política y los conflictos que habían caracterizado al país durante las décadas anteriores, especialmente durante el periodo conocido como La Violencia (1948-1958).

A continuación, se examinarán estos tres momentos a partir de las siguientes variables: la situación interna y el contexto internacional; la política del Gobierno sobre el conflicto armado; la estrategia internacional que respalda esa política; y los resultados y lecciones que se derivan de su implementación.

1. Primer momento: la diplomacia por la paz

La internacionalización de la guerra y de la paz se inicia con la llegada al poder de Andrés Pastrana. Su administración (1998-2002) estableció los derroteros y marcó la pauta para los Gobiernos sucesivos, en un momento en el que el país se encontraba sumido en una profunda crisis. El Gobierno Pastrana se halló ante una situación de gran vulnerabilidad en la que la búsqueda de una solución a la guerra interna se hacía imperativa.

Para la década de los noventa, el conflicto armado se había intensificado; se expandieron los grupos armados ilegales llegando a controlar importantes zonas del territorio, las Fuerzas Militares sufrieron derrotas significativas, y la economía nacional estaba seriamente afectada. El narcotráfico se convirtió en el factor dinamizador de la confrontación bélica al proporcionar recursos a las guerrillas para ampliar sus capacidades logísticas y de combate; por primera vez, en la larga historia del conflicto colombiano, las fuerzas insurgentes pudieron cambiar el equilibrio militar en su favor y plantearse como viable la toma del poder.

Ad portas del nuevo siglo, el impacto negativo del conflicto no solo puso al país en riesgo de falla estatal y la deriva de una “narco democracia”, sino que suscitó preocupaciones entre vecinos y aliados por un desbordamiento allende las fronteras; al configurarse como una amenaza a la estabilidad y la seguridad regionales, Colombia afrontaba la posibilidad una intervención externa. Todo esto enmarcado en el contexto de posguerra fría, en el que la comunidad internacional se inclinaba por la terminación pacífica de las guerras civiles y la promoción de un régimen de seguridad global.

El Gobierno Pastrana planteó entonces buscar una solución negociada al conflicto armado, reconociendo su naturaleza política. Su enfoque incluía poner en marcha un proceso de paz que implicara el diálogo con las guerrillas, para alcanzar un acuerdo que permitiera terminar con

décadas de violencia. Para ello se creó una zona desmilitarizada en el Caguán con el fin de facilitar las negociaciones, una región de aproximadamente cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados en los departamentos de Meta y Caquetá, controlada temporalmente por las FARC.

Convencido de que este esfuerzo requería una robusta colaboración externa, la administración estableció como estrategia internacional la denominada “Diplomacia por la paz”. A través de ella se buscó darle credibilidad al proceso de negociación; a nivel interno, el respaldo internacional podía contrarrestar la desconfianza que suscitaban los diálogos entre amplios sectores de la sociedad colombiana; asimismo, se trataba de romper el aislamiento de las FARC frente a la comunidad internacional, mostrándole a la guerrilla que tanto el entorno como los actores internacionales eran favorables al proceso.

A nivel externo, se buscó restablecer la confianza en el Estado colombiano después de la crisis de la administración Samper. El objetivo era mostrar que había un Gobierno con la voluntad de responder a la crisis nacional, capaz de canalizar la preocupación y gestionar las iniciativas internacionales para remediarla. Además de darle visibilidad al proceso de paz, la estrategia se propuso conseguir los recursos, tanto financieros como políticos, que permitieran darle sostenibilidad al proyecto de pacificación.

Para alcanzar tales objetivos, la Diplomacia por la paz se centró en varios pilares clave:

En primer lugar, promovió la participación de actores internacionales en la negociación del Caguán. El Gobierno invitó a las representaciones diplomáticas a la inauguración de los diálogos con la guerrilla; se creó la Comisión Internacional de Facilitadores y el Grupo de Países Amigos. La participación de países europeos como Suiza, Noruega, España y Francia, y de organizaciones internacionales como la ONU proporcionó legitimidad y experiencia en mediación y negociación. Estos actuaron como observadores y facilitadores, ayudando a mantener el proceso de paz en el radar internacional.

En segundo lugar, la administración Pastrana desplegó una diplomacia laboriosa para movilizar el apoyo político y financiero de la comunidad internacional. Se realizaron giras y encuentros con líderes mundiales y organismos multilaterales para conseguir respaldo a los esfuerzos de

paz y desarrollo. Esto incluía reuniones con la ONU, la OEA y otros foros internacionales en los que se explicaban los objetivos y avances del diálogo con las FARC. Asimismo, se trabajó en fortalecer las relaciones bilaterales con otros países clave en Europa y América Latina, buscando cooperación en áreas de seguridad, desarrollo y política antinarcóticos. La participación de Cuba y Venezuela contribuyó además a generar confianza y crear puentes con las guerrillas.

En tercer lugar, se formuló el Plan Colombia como núcleo de toda la estrategia. Concebido inicialmente como una especie de “Plan Marshall”, se planteó como una iniciativa integral que buscaba el respaldo internacional para la recuperación y fortalecimiento del Estado colombiano; el plan incluía componentes de desarrollo social y económico, lucha contra el narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos, mejora del dispositivo militar, y promoción de derechos humanos. Las mesas de donantes, también conocidas como grupos de apoyo o mesas de cooperación, fueron una parte esencial de la estrategia para respaldar el Plan Colombia. Estas mesas funcionaron como plataformas para coordinar y canalizar el apoyo financiero y técnico internacional hacia los objetivos del citado plan. Al respecto, se sugiere conectarlo con el contenido del séptimo capítulo del presente volumen sobre la cooperación internacional para el desarrollo y la política exterior de Colombia.

De una formulación general de patrocinio al proceso de paz, el Plan Colombia terminó por concretarse como un programa de asistencia militar por parte de los Estados Unidos. El objetivo fundamental era la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas a fin de que estas pudieran hacer frente a las amenazas representadas por la peligrosa combinación entre insurgencia armada y narcotráfico. Este plan no solo proporcionó una asistencia financiera significativa, sino también el apoyo técnico y logístico necesarios; si bien la mayor parte de la ayuda fue de carácter militar, se incluyeron también recursos para programas de desarrollo social y económico.

Para conseguir el respaldo del Gobierno Clinton (1993-2001) y lograr la aprobación del Plan Colombia en el Congreso estadounidense, el Gobierno Pastrana desplegó una intensa ofensiva diplomática. Alineó su visión y su política con los intereses y prioridades estadounidenses, se enfatizó en la lucha contra el narcotráfico como justificación principal y

se disimuló el carácter contrainsurgente de la ofensiva militar debido a las reticencias en Washington de involucrarse abiertamente en una guerra interna. Igualmente, se adelantó una enérgica campaña para lograr el beneplácito bipartidista y el respaldo de la opinión pública. El Plan Colombia fue un esfuerzo sin precedentes en la historia diplomática del país y dio lugar a lo que se ha calificado como una “intervención por invitación” (Tickner, 2007).

El hecho de que el Plan Colombia terminara siendo una estrategia bélica, formulada conjuntamente, y respaldada por Estados Unidos, generó división entre los actores internacionales; unos favorecieron la opción militar y otros se decantaron por una vía más política. La Unión Europea apoyó el objetivo general de promover la paz y el desarrollo, pero criticó el enfoque militar del Plan. La UE y algunos de sus estados miembros preferían centrarse más en las iniciativas de desarrollo económico, social y de derechos humanos que apuntaran a una solución integral al conflicto.

Por su parte, varios países latinoamericanos expresaron preocupaciones sobre las implicaciones del Plan Colombia. Temían que el aumento de la actividad militar pudiera desbordar el conflicto y las actividades relacionadas con el narcotráfico hacia sus propios territorios. Venezuela, Ecuador y Brasil, en particular, manifestaron reservas sobre la posibilidad de que la lucha contra las drogas pudiera intensificar la violencia en la región. Asimismo, numerosas ONG y grupos de derechos humanos se mostraron críticos con la estrategia por su fuerte componente represivo; Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, advirtieron que el apoyo a las fuerzas armadas colombianas podría exacerbar los abusos contra la población civil y las violaciones de derechos humanos.

Pese a las contradicciones, la administración siguió combinando la zanahoria del diálogo con el garrote de la ofensiva bélica hasta el fracaso definitivo del proceso de paz del Caguán, a principios de 2002. A pesar de los esfuerzos iniciales, las negociaciones con las FARC no lograron avances significativos; el grupo insurgente utilizó la zona de distensión no solo para dialogar, sino también para fortalecer su control territorial, lo cual generó críticas tanto nacionales como internacionales.

En suma, este primer momento marcó un punto de inflexión en la política exterior colombiana en relación con el conflicto armado. El

enfoque del Gobierno Pastrana de combinar esfuerzos de paz y desarrollo con un apoyo internacional robusto, aunque no logró los resultados esperados, sentó las bases para futuras estrategias. La apuesta de poner todas las opciones sobre la mesa, oscilando entre una visión política y una militar, generó polémica y dividió a los actores internacionales. Esto evidenció la complejidad de resolver un conflicto tan largo y profundo como el colombiano y subrayó la importancia de hacer coherente la política externa con la perspectiva internacional para alcanzar la paz.

2. Segundo momento: el imperativo de la seguridad

El segundo momento de internacionalización corresponde a la política de la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). El fracaso del proceso de paz con las FARC del Gobierno Pastrana dejó al país en una situación de altos índices de violencia e inseguridad. El fortalecimiento de los grupos armados ilegales hacía peligrar la estabilidad del Estado colombiano y la legitimidad del régimen. Uribe, quien había hecho campaña prometiendo una mano dura contra las guerrillas, asumió la presidencia con un mandato claro de restaurar la seguridad y el orden.

La política de Seguridad Democrática se basaba en la premisa de que la violencia y el narcotráfico eran las principales amenazas a la seguridad nacional y que debían ser combatidas con firmeza. Los objetivos incluían la recuperación del control estatal sobre todo el territorio nacional, la reducción de los índices de violencia, y el debilitamiento de los grupos rebeldes.

El Gobierno implementó una serie de medidas que incluían el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el incremento de la presencia estatal en áreas rurales, y la promoción de políticas de desmovilización para los combatientes de las guerrillas y los grupos paramilitares.²¹ Para ello se intensificaron las operaciones militares y se

²¹ Como parte de la política de seguridad, se promovió la desmovilización de los grupos paramilitares, principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mediante la Ley de Justicia y Paz (2005). Esta ley ofrecía beneficios judiciales a cambio de la desmovilización y la confesión de crímenes; más de treinta mil combatientes se desmovilizaron oficialmente.

aumentó significativamente el presupuesto de defensa. Asimismo, se reforzaron las acciones contra el narcotráfico, incluyendo fumigaciones aéreas y erradicación manual de cultivos ilícitos, al igual que operaciones contra las estructuras criminales.

La administración Uribe adoptó una estrategia de política exterior que respaldaba su enfoque de Seguridad Democrática; su objetivo era obtener apoyo externo para una lucha frontal contra las guerrillas. El entorno de entonces resultó particularmente favorable debido los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; la subsecuente lucha global contra el terrorismo promovida por el Gobierno de George W. Bush creó un ambiente propicio para que el país recibiera la cooperación que necesitaba.

De este modo, el Plan Colombia no solo se mantuvo como el centro de la estrategia, sino que fue significativamente extendido y fortalecido. El alineamiento político e ideológico con la superpotencia se hizo aún más estrecho y, bajo su influjo, la visión de la confrontación interna mutó: de ser concebida como un conflicto armado, con significado e implicaciones políticas, pasó a ser definida una “amenaza terrorista” a la seguridad no solo nacional sino incluso global. Así, lo que se originó como un lineamiento estratégico de Washington en Colombia, evolucionó hasta convertirse en parte vital de la estrategia colombiana en su relacionamiento con Estados Unidos.

Uribe mantuvo una relación cercana con el Gobierno estadounidense, realizando frecuentes visitas a Washington y asegurando el apoyo bipartidista en el Congreso para la continuación del Plan. La cooperación también dio lugar a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, el cual se firmó en 2006, pero que solo pudo ser ratificado en el Congreso estadounidense en 2011.

Asimismo, el Gobierno emprendió una campaña internacional para evitar que a las FARC se les reconociera el estatus de beligerancia y, por el contrario, fueran declarados grupos terroristas.²² Este estatus implicaba reconocer a la guerrilla como una fuerza política legítima que controla

²² El estatus de beligerancia, otorga ciertos derechos y deberes bajo el derecho internacional humanitario (DIH), como el trato a prisioneros de guerra y el reconocimiento de algunas conductas durante los combates.

territorio y tiene un mando organizado, lo que podría llevar a la necesidad de negociar en condiciones de igualdad y hacerles concesiones políticas. Uribe prefería mantener a las FARC bajo la categoría de actores ilegales, sin derechos reconocidos en el ámbito de un conflicto armado regular. La inclusión de las FARC en la lista de grupos terroristas en EE. UU. y la Unión Europea (UE) ayudó a aislar políticamente a la guerrilla, limitando su capacidad de operar y movilizarse internacionalmente.

La estrecha alianza con la superpotencia contrastó con una posición más cautelosa y crítica por parte de otros actores internacionales. La Unión Europea reafirmó su proclividad por una solución integral al conflicto; así, mientras que el apoyo estadounidense se centró en el fortalecimiento militar y la lucha contra el narcotráfico, los europeos enfocaron su ayuda en proyectos de desarrollo socioeconómico, derechos humanos y fortalecimiento institucional. La UE proporcionó fondos para programas de desarrollo rural, reintegración de excombatientes y fortalecimiento de la justicia.

La relación con países vecinos fue mixta. Uribe mantuvo relaciones cercanas con algunos Gobiernos de la región que compartían su preocupación por la seguridad y el narcotráfico, como Perú y Brasil. Sin embargo, tuvo tensiones con otros países, especialmente Venezuela y Ecuador, debido a acusaciones de refugio a guerrilleros y operaciones militares transfronterizas.²³ Durante este periodo, varios países de América Latina eligieron Gobiernos de izquierda, como Venezuela con Hugo Chávez y Bolivia con Evo Morales. Estas administraciones solían ser críticas de las políticas de seguridad de Uribe y del apoyo estadounidense a Colombia. Particularmente difícil fue la relación con Venezuela. Uribe acusó repetidamente a Chávez de permitir que las FARC utilizaran territorio venezolano como refugio y base de operaciones. Ambos mandatarios intercambiaron frecuentemente acusaciones y discursos beligerantes, lo que agravó la situación y aumentó la desconfianza mutua. En varias ocasiones, las tensiones llegaron a tal punto que se rompieron las relaciones diplomáticas.

²³ La incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano en 2008 para atacar un campamento de las FARC generó tensiones que complicaron la estrategia internacional de Uribe al crear un ambiente regional hostil.

De otra parte, organizaciones internacionales como la ONU y la OEA desempeñaron papeles importantes en diversos aspectos de la política de seguridad en Colombia. Las relaciones con la administración Uribe fueron una mezcla de cooperación y disensos. A través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), la ONU mantuvo una presencia en el país para monitorear la situación de los derechos humanos; emitió informes y recomendaciones sobre violaciones, incluyendo los casos de “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad). También proporcionó asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto, incluyendo desplazados internos y comunidades afectadas por la violencia. Organizaciones como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) jugaron un rol crucial en la protección y asistencia a los desplazados. El papel de estos actores parte del multilateralismo se puede profundizar en el sexto capítulo propuesto por Fabio Sánchez, fundamentalmente lo concerniente a las Misiones de Verificación de Naciones Unidas en el país.

La OEA estableció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) en 2004 para acompañar y verificar el proceso de desmovilización y reintegración de grupos paramilitares. La Misión se centró en la verificación del cumplimiento de los compromisos de desmovilización, la reintegración de excombatientes y la atención a las víctimas del conflicto. Además, facilitó el diálogo y la diplomacia en momentos de tensiones regionales, particularmente en incidentes fronterizos.

Así, en este segundo momento se dio un cambio significativo en la política exterior con respecto al conflicto armado. La política de Seguridad Democrática, respaldada por una fuerte alianza con Estados Unidos y un enfoque militarizado del conflicto, logró debilitar considerablemente a las FARC, desmovilizar a los paramilitares, y mejorar la seguridad en muchas áreas del país. Sin embargo, este enfoque de mano dura tuvo costos en términos de derechos humanos y contribuyó a la polarización social y política interna. Las críticas internacionales por violaciones de derechos humanos, la insuficiencia en abordar las raíces sociales y políticas de la guerra, y el aislamiento regional subrayaron la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la búsqueda de una salida a la guerra.

3. Tercer momento: la construcción de la paz

El tercer momento corresponde a lo que internacionalmente se denomina “construcción de la paz” (*peacebuilding*): un proceso que comprende tanto la etapa de negociación y firma del acuerdo de paz, como la de implementación de los compromisos y cimentación de las bases para el postconflicto.

La administración Santos (2010-2018) llegó con una perspectiva diferente a la del Gobierno precedente, demostrando su disposición a explorar vías de negociación con las guerrillas. En buena medida esto fue posible gracias a que al cambio en el equilibrio de poder militar entre el gobierno y las FARC, resultado de la implementación del Plan Colombia; ante la evidencia de que no podían ganar a través de la fuerza de las armas, la guerrilla se mostró proclive a una negociación con el nuevo Gobierno.

Si en los dos momentos anteriores la política exterior había jugado un papel clave en la búsqueda de soluciones al conflicto armado, en ese tercer momento será aún más decisiva, adquiriendo un papel protagónico en cada una de las etapas del proceso de paz. La estrategia de política exterior del Gobierno Santos adoptó un enfoque integral y multilateral que incluía la conformación de alianzas, la cooperación regional y el fortalecimiento de la imagen de Colombia como un actor comprometido con la democracia y los derechos humanos. Se centró en conseguir el apoyo de la comunidad internacional para un proceso de paz ambicioso y complejo, aprovechando las experiencias previas y desarrollando las capacidades técnicas para construir una amplia coalición de apoyo, tanto política como financiera.

El contexto internacional fue significativamente propicio; el énfasis global en los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, impulsado por organismos como la ONU, estableció un marco favorable para las negociaciones. El enfoque más pragmático de la administración Obama (2009-2017) frente a la lucha contra el terrorismo y el combate al narcotráfico, así como la presencia de Gobiernos progresistas en América Latina, como los de Brasil, Argentina, y Uruguay, facilitaron el apoyo hemisférico al proceso de paz. Estos Gobiernos lo vieron como una oportu-

tunidad para fortalecer la estabilidad regional y promover una agenda de desarrollo inclusivo.

Los elementos clave de la estrategia internacional de Santos fueron:

El desarrollo de una diplomacia activa y multilateral para fortalecer relaciones y obtener apoyo externo. Se establecieron alianzas con Estados (Gobiernos) y organizaciones internacionales que respaldaron los diálogos, dentro de los que se destacaron los Estados Unidos, la Unión Europea, Cuba y Noruega. Estos dos últimos actuaron como mediadores.

La gestión de la imagen internacional. Se trabajó en mejorar la imagen de Colombia, presentando al país como un actor comprometido con la paz y el desarrollo. Esto ayudó a reducir la percepción negativa asociada con décadas de conflicto armado y violencia.

La coordinación con actores internacionales. Se promovió la cooperación regional, reconociendo la importancia de la estabilidad para el éxito del proceso de paz. Se trabajó estrechamente con países vecinos y organizaciones multilaterales para abordar preocupaciones compartidas y fortalecer el respaldo latinoamericano.

La participación de actores internacionales fue esencial para crear un ambiente adecuado para las negociaciones. La facilitación y mediación de países garantes como Cuba y Noruega, junto con el acompañamiento de Venezuela y Chile, ayudaron a establecer un marco de confianza y neutralidad. El apoyo técnico y financiero de la ONU, la OEA, la UE y los Estados Unidos proveyó los recursos y la legitimidad necesarios para avanzar en los diálogos. La elección de La Habana, Cuba, como sede brindó un entorno neutral y seguro que permitió a las partes concentrarse en las negociaciones sin distracciones externas.

Este respaldo internacional no solo facilitó la fase exploratoria, sino que también sentó las bases para las etapas posteriores del proceso de paz. Los organismos internacionales contribuyeron a construir confianza, garantizar el cumplimiento de los compromisos y apoyar la construcción de una paz sostenible. La ONU desempeñó un papel fundamental; designó a un enviado especial, Jean Arnault, quien facilitó el diálogo y aseguró que las discusiones se desarrollaran en un ambiente constructivo. Asimismo, estableció la Misión de Verificación en 2016 para acompañar y constatar la implementación del Acuerdo de paz (ver capítulo seis). Esto incluyó monitorear el cese al fuego bilateral, la dejación de

armas por parte de las FARC, y la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Naciones Unidas brindó apoyo técnico y asesoramiento en áreas clave como la reintegración socioeconómica de excombatientes, la reforma rural integral, y la justicia transicional. Esto ayudó a garantizar que las medidas acordadas fueran implementadas de manera efectiva y en línea con los estándares internacionales.

La ONU también respaldó la creación y el funcionamiento de las instituciones establecidas por el Acuerdo de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La organización ejerció tareas de coordinación para movilizar el apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional para la implementación del Acuerdo de paz. Esto incluyó la coordinación de donaciones y la gestión de fondos destinados a proyectos específicos de desarrollo y reintegración.

Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), brindó asistencia técnica y monitoreo en el terreno, lo que ayudó a generar confianza entre las partes negociadoras. Se encargó de monitorear las dinámicas del conflicto y el cumplimiento de los acuerdos en diversas regiones del país, especialmente en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados. También participó en la verificación del proceso de desmovilización y reintegración de los excombatientes de las FARC. Este monitoreo incluyó la observación de los puntos y zonas transitorias de normalización, donde los excombatientes se concentraron para dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Igualmente, la MAPP desempeñó labores de acompañamiento a las comunidades afectadas y promovió el respeto y la protección de los derechos humanos.

En lo concerniente a Estados Unidos, las relaciones bilaterales reflejaron un cambio en las prioridades estratégicas y las visiones compartidas, pasando de un enfoque militarizado y centrado en la seguridad hacia un apoyo más integral a la paz y la estabilidad mediante la negociación y el acuerdo. En 2015 el Gobierno de Obama designó a Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, quien jugó un rol en facilitar las conversaciones y asegurar apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense.

El tema del narcotráfico fue un aspecto complejo durante las negociaciones en La Habana. Para Washington, la continuación de la lucha contra las drogas era indeclinable; insistió en que, como parte del Acuer-

do de paz, las FARC se comprometieran a abandonar el negocio ilícito y a contribuir activamente a la lucha contra este flagelo. Este pacto incluía la eliminación de cultivos ilícitos y la cooperación con las autoridades colombianas y estadounidenses en programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo.

Por su parte, la Unión Europea se mostró en sintonía con la perspectiva del Gobierno Santos; manifestó su apoyo público desde el principio y patrocinó proyectos relacionados con los diálogos y el postconflicto. La Comisión Europea envió delegaciones para observar y acompañar las negociaciones. Tras la firma del Acuerdo de paz en 2016, la UE proveyó fondos para iniciativas de desarrollo rural, la reintegración de excombatientes y la reparación de víctimas. Uno de los programas más destacados fue el Fondo Europeo para la Paz, que financió proyectos orientados a la consolidación de la paz en las zonas más afectadas por el conflicto. Apoyó la creación y fortalecimiento de instituciones clave para la implementación del acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Además, la UE trabajó en colaboración con ONG locales y transnacionales para promover los derechos humanos y la justicia transicional.

Las relaciones con Venezuela fueron otro elemento relevante en el proceso de paz. Luego de las constantes desavenencias que caracterizaron el periodo anterior, el Gobierno Santos buscó mejorar los vínculos con el país vecino. El enfoque pragmático y orientado a la diplomacia marcó el inicio de una nueva etapa de entendimiento y cooperación. Hugo Chávez actuó como facilitador del diálogo entre las partes; ofreció su territorio para reuniones exploratorias y confidenciales entre el Gobierno colombiano y representantes del grupo insurgente, lo cual procuró un espacio seguro y neutral para las primeras fases del diálogo. Asimismo, el mandatario venezolano utilizó su influencia sobre las FARC para persuadir a sus líderes de que la negociación era el mejor camino para resolver el conflicto. Después de la muerte de Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, continuó con el respaldo al proceso de paz. Aunque las relaciones bilaterales enfrentaron nuevos desafíos, esta disposición se mantuvo.

En conjunto, la política exterior del Gobierno Santos fue fundamental para establecer las bases diplomáticas, políticas y sociales necesarias

para la negociación de paz y la posterior firma del acuerdo con las FARC. Esta estrategia no solo buscó asegurar el apoyo internacional y regional, sino también involucrar activamente a los diferentes actores nacionales e internacionales en la construcción de una paz sostenible. En este tercer momento, la vía política prevaleció, mostrando que, aunque complejas y a menudo conflictivas, las negociaciones podían abrir caminos hacia la paz y la reconciliación.

Aunque la implementación del acuerdo enfrentó y sigue enfrentando numerosos desafíos, el proceso sentó las bases para el postconflicto. La experiencia de la administración Santos mostró la importancia de contar con un amplio apoyo internacional para lograr una solución del conflicto armado en el largo plazo.

Conclusión

La internacionalización de la guerra y de la paz en Colombia muestra hasta qué punto el conflicto armado ha estado marcado por un progresivo entrecruzamiento entre factores internos y externos. Tanto por los cambios en su propia dinámica, como por las transformaciones del contexto de la posguerra fría, la confrontación armada colombiana adquirió visibilidad y atención internacionales. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, los sucesivos Gobiernos han enfrentado considerables desafíos en el propósito de ponerle fin a la guerra. Uno de estos retos ha sido cómo responder ante las preocupaciones y encauzar el interés de los actores internacionales en torno a la solución del conflicto; razón por la cual la política exterior se convirtió en un pilar del proyecto político nacional de pacificación.

Los tres momentos de la internacionalización analizados aquí muestran un camino de aprendizaje, trazado a punta de ensayo y error; el primer momento fue exploratorio en términos de abrir las posibilidades, poner ambas vías de solución, la militar y la negociada, al conflicto sobre la mesa y calibrar las posiciones y reacciones de los actores internacionales frente a ellas. En ese sentido, la Diplomacia por la Paz del Gobierno Pastrana fue una apuesta inicial para este siglo de carácter multilateral que, con la puesta en marcha del Plan Colombia y el fracaso de las

negociaciones con las FARC, terminó por inclinar la balanza en favor de la opción militar.

El segundo momento es el de la diplomacia por la guerra; en él, la política exterior se centró en los objetivos de seguridad, lo que reforzó el alineamiento con Estados Unidos. La política de Seguridad Democrática redefinió el conflicto subsumiéndolo en la lucha global contra el terrorismo y generando tensiones y desencuentros con otros actores internacionales y regionales. Luego de una intensa y sostenida campaña contrainsurgente por parte de la administración Uribe, el debilitamiento político y militar de las guerrillas abonó el terreno para una nueva tentativa de diálogo entre las partes.

El tercer momento corresponde a la creación de condiciones y el desarrollo del proceso de paz; la negociación con las FARC se extiende a lo largo de cuatro años, la cual conduce a la firma del Acuerdo de paz en 2016. El Gobierno Santos orientó los esfuerzos y recursos diplomáticos para impulsar el proceso de manera integral y multilateral. La receptividad y el compromiso de países, organizaciones y ONG internacionales con la construcción de paz contrastó con la oposición de algunos sectores internos a los diálogos y compromisos del Gobierno con la guerrilla.

Estos tres momentos marcaron una trayectoria que delimitó las opciones, desarrolló las capacidades y adoptó las medidas necesarias que han hecho que la política exterior del país sea hoy más compleja, diversificada y polivalente que hace veinte o treinta años, tal como lo expusieron Coy y Morales en el tercer capítulo al analizar lo que va del siglo XXI en materia de inserción global. La internacionalización de la guerra y la paz en Colombia ha tenido así múltiples efectos. En primer lugar, ha provocado una oscilación constante entre enfoques militares y negociados, reflejando las divisiones internas y externas sobre cómo abordar el conflicto. En un movimiento pendular, cada una de estas alternativas ha tenido efectos distintos en el manejo de la política exterior. Esta fluctuación ha afectado la coherencia y estabilidad de la política, mostrando la complejidad del fenómeno y dificultando la construcción de una estrategia sostenida a largo plazo.

En segundo lugar, la internacionalización ha tenido un doble efecto sobre la política exterior: amplió el margen de maniobra del Gobierno

nacional en algunos aspectos, pero lo restringió en otros. Así, por un lado, incrementó el apoyo internacional en forma de asistencia financiera y militar, y de legitimidad. En estos años, Colombia amplió y diversificó su red de aliados, estableciendo relaciones con una variedad de países y organizaciones; esto les permitió a las administraciones contar con múltiples fuentes de apoyo político y cooperación económica. La participación de los organismos internacionales, específicamente de Naciones Unidas, se analiza a profundidad en el capítulo de Sánchez.

Por otro lado, limitó la capacidad de acción nacional, ya que se generó una dependencia de la ayuda internacional y expuso al país a mayores presiones externas. La fuerte alineación con los intereses de seguridad estadounidenses fue tanto una fortaleza como una debilidad, proporcionando recursos cruciales, pero también imponiendo restricciones y condiciones. Asimismo, los acuerdos con organismos internacionales y donantes comprometieron a Colombia a seguir ciertas directrices y reportar avances, lo que en ocasiones restringió la flexibilidad del Gobierno para cambiar de estrategia según las circunstancias internas.

En tercer lugar, la internacionalización tuvo un impacto significativo en el manejo institucional del relacionamiento internacional por parte del Estado colombiano. Este proceso transformó las estructuras y prácticas diplomáticas del país, ampliando su alcance y modificando sus prioridades. Se crearon y fortalecieron entidades especializadas para manejar los aspectos internacionales del conflicto y la paz.

Diversas instituciones nacionales desempeñaron roles específicos en la articulación, implementación y supervisión de las políticas y programas relacionados con la cooperación internacional: el Ministerio de Relaciones Exteriores (donde se crearon nuevas dependencias y oficinas especializadas); la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), creada en 2011; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Defensa Nacional; la Alta Consejería para Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad; y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La ampliación de la capacidad institucional generó algunas contradicciones y cruce de competencias, por lo cual se hizo necesaria una mayor colaboración y coordinación entre diferentes entidades gubernamenta-

les; se establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional para asegurar una respuesta coherente y unificada en el ámbito internacional. Asimismo, se implementaron sistemas de monitoreo y evaluación para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos internacionales destinados a la paz y el desarrollo.

Finalmente, el involucramiento de actores no estatales y la sociedad civil nacional e internacional amplió el espectro de la diplomacia colombiana. Su papel ha sido clave en el proceso de paz y en la promoción de derechos humanos, lo que ha enriquecido el debate, a la par que ha introducido nuevas dinámicas y presiones en la política exterior. Estos actores han aumentado la transparencia, influido en la agenda política, facilitado el diálogo, ejercido presión internacional, implementando programas y empoderado a las comunidades locales. Su participación ha contribuido a hacer la política exterior más inclusiva, responsable y orientada a los derechos humanos, pero también más difícil de conciliar y coordinar.

En suma, la internacionalización de la guerra y la paz ha tenido un impacto profundo y multifacético en la política exterior de Colombia. Ha impulsado cambios significativos en la estrategia y en las relaciones internacionales del país, reflejando tanto los éxitos como los desafíos de un conflicto prolongado y complejo, que por ejemplo se revisan en el siguiente capítulo.

Aunque existen importantes estudios que abordan algunas de estas trasformaciones, todavía hace falta desarrollar trabajos de investigación que profundicen en estas temáticas y permitan tener un panorama más completo de lo que representa el caso colombiano de construcción de la paz y postconflicto a nivel global. Lo relevante es que, de una u otra forma, dichos cambios han impactado directamente en el ejercicio de confeccionar la estrategia que desde el capítulo inicial de Vargas-Alzate se insistió como mecanismo fundamental para lograr una inserción más asertiva y eficaz.

Preguntas de reflexión del capítulo

1. Evaluación de estrategias de paz:

¿Cuáles fueron las principales diferencias en las estrategias de paz y seguridad adoptadas por los Gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos? ¿Qué factores internos y externos influyeron en la adopción de estas estrategias?

2. Oscilación entre visiones:

¿Cómo ha influido la oscilación entre enfoques militares y políticos en la resolución del conflicto armado en Colombia? ¿Qué explica este movimiento pendular y qué efectos ha tenido en la estabilidad y seguridad del país?

3. Desafíos de implementación:

¿Cuáles han sido los principales desafíos en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia? ¿Cómo han respondido los diferentes Gobiernos a estos desafíos y qué rol ha jugado la comunidad internacional en apoyar o criticar estos esfuerzos?

Referencias

Agudelo, J. y Riccardi, D. (2019). La cooperación internacional para la paz en Colombia: los casos de Estados Unidos y de la Unión Europea (1998-2016). *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, 10(1). <https://doi.org/10.5209/GEOP.61477>

Bocchi, D. (2013). La política exterior colombiana y el costo de ignorar a las organizaciones no gubernamentales. *Papel Político*, 18(1).

Borda, S. (2012). *La internacionalización de la paz y de la guerra en Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: búsqueda de legitimidad política y capacidad militar*. Universidad de los Andes.

David, H. G., Badillo, R., y Rodríguez, M. (2019). Evolución de la política exterior de Colombia en el periodo 2002-2018. *Oasis*, 29. <https://doi.org/10.18601/16577558.n29.04>

García Duque, J., y Casadiego, J. P. (2021). International cooperation in peacebuilding: Stakeholder interaction in Colombia. *Third World Quarterly*, 42(10), 2372-2392. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1951200>

González Parias, C. H., Mesa Bedoya, J. C. y Alzate, M. C. (2022). The role of international actors in the negotiation process between the Colombian Government and the Farc-Ep: A necessary and controlled participation. *Estudos Internacionais: Revista de Relações Internacionais Da PUC Minas*, 10(2). <https://doi.org/10.5752/P2317-773X.2022v10n2p59-77>

Kline, H. F. (2020). *Between the sword and the wall: The Santos peace negotiations with the revolutionary armed forces of Colombia*. The University of Alabama Press.

Mendez, Á. (2017). *Colombian agency and the making of US foreign policy. Intervention by invitation*. Routledge Taylor & Francis Group.

Pachón, R. (2009). Plan Colombia: Exploring some myths and effects on Colombian foreign policy 1998-2006. *Análisis Político*, 22(65).

Pastrana, E., y Castro, R. (2017). Retos, socios estratégicos y escenarios para la política exterior colombiana durante el posconflicto. *Agenda Internacional*, 24(35). <https://doi.org/10.18800/agenda.201701.006>

Pastrana, E., y Gehring, H. (2017). *La política exterior colombiana de cara al posconflicto*. KAS - Editorial Pontificia Universidad Javeriana. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=62156d53-272f-7966-3465-d085371a4942&groupId=287914

Rodríguez, E. (2017). Internacionalización del conflicto, del acuerdo y del postacuerdo. Evolución, continuidades y rupturas de una estrategia. *Análisis Político IEPRI Universidad Nacional de Colombia*, 30(90), 194-208. <https://doi.org/10.15446/ANPOL.V30N90.68307>

Rojas, D. M. (2012). La intervención internacional: los desafíos de la conceptualización. *Colombia Internacional*, 76, 81-109.

Rojas, D. M. (2015). *El Plan Colombia: la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)*. Penguin Random House. IEPRI Universidad Nacional de Colombia.

Rojas, D. M. (2017). Estados Unidos en la construcción de la paz en Colombia. *Análisis Político*, 30(91), 37-52. <https://doi.org/10.15446/anpol.v30n91.70263>

Tickner, A. B. (2007). Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales. *Colombia Internacional*, 65. <https://doi.org/10.7440/colombiaint65.2007.04>

Tokatlian, J. G. (2008). La construcción de un “Estado fallido” en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. *Análisis Político*, 21(64), 67-104.